

Memento Práctico Inspección de Trabajo

es una obra colectiva
realizada por iniciativa
y bajo la coordinación de
Ediciones Francis Lefebvre

Coordinación:

Adrián González Martín

Inspector de Trabajo y Seguridad Social

Han Colaborado:

Admetlla Ribalta Jaume. Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Calveras Augé Raquel. Inspectora de Trabajo y Seguridad Social.

Cid Campo Angel. Subinspector de Empleo y Seguridad Social.

Martínez Goicoechea Pedro. Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

López Parada Rafael. Magistrado de la Sala de lo Social del TSJ Castilla y León. Inspector de trabajo excedente.

Pascual Lizana Concepción. Inspectora de Trabajo y Seguridad Social.

Sánchez de la Arena Miguel Angel. Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Velázquez Fernández Manuel. Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

© EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE, S. A.

Santiago de Compostela, 100. 28035 Madrid. Teléfono: (91) 210 80 00. Fax: (91) 210 80 01
www.efl.es

ISBN: 84-96535-26-6

ISSN: 1887-0392

Depósito legal: M-43955-2006

Impreso en España

por Printing'94

Puerto Rico, 3. 28016 Madrid

MEMENTO PRÁCTICO
FRANCIS LEFEBVRE

Inspección de Trabajo

2007-2008

Actualizado a 29 noviembre 2006

Plan general de la obra

nº
Marginal

Abreviaturas

PARTE I. SISTEMA DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Capítulo I.	Definición y objeto del sistema de la ITSS	1
Capítulo II.	La función inspectora	200
Capítulo III.	Ámbito de actuación de la ITSS	600
Capítulo IV.	Funcionarios que integran el sistema de ITSS	900
Capítulo V.	Organización del sistema de la ITSS	1300
Capítulo VI.	Principios ordenadores de la ITSS	1400

PARTE II. INFRACCIONES EN EL ORDEN SOCIAL

Capítulo VII.	Disposiciones generales	1700
Capítulo VIII.	Infracciones laborales	1800
Capítulo IX.	Seguridad Social	2400
Capítulo X.	Emigración, movimientos migratorios y trabajo de extranjeros	2550
Capítulo XI.	Sociedades cooperativas	2600
Capítulo XII.	Obstrucción a la labor inspectora	2650

PARTE III. RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

Capítulo XIII.	Graduación de sanciones	2700
----------------	-------------------------------	------

PARTE IV. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DERIVADOS DE LA ACTUACIÓN INSPECTORA

Capítulo XIV.	Procedimiento administrativo sancionador	3000
Capítulo XV.	Empleo, formación profesional, ayudas para el fomento de empleo y prestaciones de Seguridad Social	5000
Capítulo XVI.	Prevención de riesgos laborales en las AAPP	5100
Capítulo XVII.	Empresas que ejerzan actividades en centros, bases o establecimientos militares	5400
Capítulo XVIII.	Reclamación de cuotas de la Seguridad Social	5500
Capítulo XIX.	Otros procedimientos en materia de prevención de riesgos laborales relacionados con la actuación inspectora	6000

	n° Marginal
PARTE V. LA ACTUACIÓN DE LA ITSS Y SU RELACIÓN CON LOS PROCESOS JUDICIALES	
Capítulo XX. La actuación de la ITSS y su relación con los procesos judiciales.....	6500
ANEXOS	9000
TABLA ALFABÉTICA	

Principales siglas y abreviaturas

Admón:	Administración
AN:	Audiencia Nacional
AP:	Audiencia Provincial
Ar:	Aranzadi (Repertorio de Jurisprudencia TCT)
ARP:	Aranzadi (Repertorio de Jurisprudencia TSJ, AP y otros Tribunales)
art.:	artículo/s
AS:	Aranzadi Social
AT:	Audiencia Territorial
BISS:	Boletín Informativo de la Seguridad Social
BOCA:	Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
BOE:	Boletín Oficial del Estado
BOP:	Boletín Oficial de la Provincia
BTSS:	Boletín de Trabajo y Seguridad Social
CC:	Código Civil
CCAA:	Comunidades Autónomas
CE:	Comunidad Europea
Ce:	Corrección de errores
CEE:	Comunidad Económica Europea
CENELEC:	Norma técnica del Comité Europeo de Normalización Electrotécnica y Electrónica
CEI:	Normas de la Comisión Electrónica Internacional
Circ:	Circular
CCol:	Convenio Colectivo
CGPJ:	Consejo General del Poder Judicial
Const:	Constitución Española
cont-adm:	contencioso-administrativo
CP:	Código Penal
CTA:	Cooperativa de Trabajo Asociado
D:	Decreto
DF:	Decreto Foral
DG:	Dirección General
DGINSS:	Dirección General del INSS
DGITSS:	Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
DGOAS:	Dirección General de Ordenación y Asistencia Sanitaria
DGOJEC:	Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras
DGOSS:	Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
DGRESS:	Dirección General de Régimen Económico de la Seguridad Social
DGRJ:	Dirección General de Régimen Jurídico
DGSFP:	DG de Seguros y Fondos de Pensiones
DGSJE:	Dirección General del Servicio Jurídico del Estado
DGTr:	Dirección General de Trabajo
Dir:	Directiva
disp.adic.:	disposición adicional
disp.derog.:	disposición derogatoria
disp.final:	disposición final
disp.trans.:	disposición transitoria
DL:	Decreto Ley
DLeg:	Decreto Legislativo
DNI:	Documento Nacional de Identidad
DOCE:	Diario Oficial de las Comunidades Europeas
DOUE:	Diario Oficial de la Unión Europea
DSI:	Doctrina Social de Instancia
EN:	Norma técnica europea
ET:	Estatuto de los Trabajadores (RDLeg 1/1995)
ETSI:	Norma técnica de telecomunicación europea

ETT:	Empresas de Trabajo Temporal
FOGASA:	Fondo de Garantía Salarial
FSE:	Fondo Social Europeo
HD:	Documento técnico armonizado europeo
IMERSO:	Instituto de Mayores y Servicios Sociales
INEM:	Instituto Nacional de Empleo
INGESA:	Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
INSHT:	Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
Instr:	Instrucción
INSS:	Instituto Nacional de la Seguridad Social
IPC:	Índice de Precios al Consumo
IRPF:	Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
ISM:	Instituto Social de la Marina
ISO:	Normas de la Organización Internacional de Normalización
ITC:	Instrucciones técnicas complementarias
ITSS:	Inspección de trabajo y Seguridad Social
JS:	Juzgado Social
JUR:	Jurisprudencia Base de datos Aranzadi
L:	Ley
LA:	Laudo arbitral
LCAP:	Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RDLeg 2/2000)
LCon:	Ley Concursal (L 22/2003)
LCoop:	Ley de Cooperativas (L 27/1999)
LEC:	Ley de Enjuiciamiento Civil (L 1/2000)
LECr:	Ley de Enjuiciamiento Criminal (RD 14-9-1882)
LETT:	Ley de Empresas de Trabajo Temporal (L 14/1994)
LGP:	Ley General Presupuestaria (L 47/2003)
LGSS/74:	Ley General de la Seguridad Social (D 2065/1974)
LGSS:	Ley General de la Seguridad Social (RDLeg 1/1994)
LGT:	Ley General Tributaria (L58/2003)
LCA:	Ley de Jurisdicción Contencioso-administrativa (L 29/1998)
LO:	Ley Orgánica
LOLS:	Ley Orgánica de Libertad Sindical (LO 11/1985)
LOPJ:	Ley Orgánica del Poder Judicial (LO 6/1985)
LOSP:	Ley de Ordenación y Supervisión del Seguro Privado (RDLeg 6/2004)
LOT:	Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LO 2/1979)
LPFP:	Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones (L 8/1987)
LPG:	Ley de Presupuestos Generales del Estado (anual)
LPL:	Ley de Procedimiento Laboral (RDLeg 2/1995)
LPRL:	Ley de Prevención de Riesgos Laborales (L 31/1995)
LRJPAC:	Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (L 30/1992)
LSA:	Ley de Sociedades Anónimas (RDLeg 1564/1989)
LSL:	Ley de Sociedades Laborales (L 4/1997)
LSS:	Texto articulado de la Ley de Bases de Seguridad Social (D 907/1966)
modif:	modificado/a
MAP:	Ministerio de Administraciones Públicas
MATEPSS:	Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social
MDEF:	Ministerio de Defensa
MFOM:	Ministerio de Fomento
MINT:	Ministerio de Interior
MP:	Ministerio de Presidencia
MTAS:	Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
MUFACE:	Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado
MUNPAL:	Mutualidad Nacional de Previsión de Administración Local
NIF:	Número de Identificación Fiscal
OESS:	Ordenación Económica de la Seguridad Social
OIT:	Organización Internacional del Trabajo
OJSS:	Ordenación Jurídica de la Seguridad Social

OM:	Orden Ministerial
PSS:	Plan General de Seguridad y Salud
RD:	Real Decreto
RDL:	Real Decreto Ley
RDLeg:	Real Decreto Legislativo
Rec:	Recurso
redacc:	redacción
RESS:	Régimen Especial de la Seguridad Social
Resol:	Resolución
RETT:	Reglamento de Empresas de Trabajo Temporal (RD 4/1995)
Rg:	Registro
RGSS:	Régimen General de la Seguridad Social
Rgto:	Reglamento
RJ:	Repertorio jurisprudencia Aranzadi Tribunal Supremo
RJCA:	Repertorio de jurisprudencia contencioso-administrativa Aranzadi
RMPS:	Reglamento de Mutualidades de Previsión Social (RD 1430/2002)
ROSSP:	Reglamento de Ordenación y Supervisión del Seguro Privado (RD 2486/1988 –modif RD 297/2004–)
RFPF:	Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones (RD 304/2004)
RSP:	Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales (RD 39/1997)
SA:	Sociedad Anónima
SAL:	Sociedad Anónima Laboral
SE:	Secretaría de Estado
SG:	Secretaría General
SGPE:	Subdirección General de Promoción de Empleo
SL:	Sociedad Laboral
SLL:	Sociedad Limitada Laboral
SMI:	Salario Mínimo Interprofesional
SNE:	Servicio Nacional de Empleo
SOVI:	Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez
SP:	Servicio de Prevención
SPA:	Servicio de Prevención ajeno
SPEE-INEM:	Servicio Público de Empleo Estatal (antes INEM)
SPP:	Servicio de Prevención propio
SS:	Seguridad Social
TCO:	Tribunal Constitucional
TCJ:	Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales
TCT:	Tribunal Central de Trabajo
TEAC:	Tribunal Económico-Administrativo Central
TGSS:	Tesorería General de la Seguridad Social
TJCE:	Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
TR:	Texto refundido
TRLRFPF:	TR de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones (RDLeg 1/2002)
TS:	Tribunal Supremo
TSJ:	Tribunal Superior de Justicia
UE:	Unión Europea
UNE:	Norma técnica de normalización española
UNE-EN:	Norma técnica española que adapta una norma europea o documento armonizado
Unif doctrina:	Unificación de doctrina

PARTE I

**Sistema
de la Inspección
de Trabajo y
Seguridad Social**

CAPÍTULO I

Definición y objeto del Sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

SUMARIO

A. Naturaleza e incardinación administrativa	10
1. Ubicación administrativa de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social	15
2. Relaciones entre las Administraciones sobre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social	25
3. Exclusiones del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social	30
4. Alta Inspección del Estado en el orden social	35
B. Principios legales	40
1. Principio de legalidad	45
2. Presunción de inocencia	55
3. Principio de responsabilidad objetiva	65
4. Principio de proporcionalidad	70
5. Principio non bis in idem	75
C. Normas reguladoras	80
1. Normas supranacionales	85
2. Normas generales por la condición de funcionarios públicos	90
3. Normas específicas reguladoras del Sistema de Inspección y procedimiento de actuación	95
4. Normas tipificación y sanción de incumplimientos	100
5. Otras referencias normativas vigentes sobre materias específicas, que mencionan expresamente a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social	105

El Estado tiene **competencia** exclusiva en materia de **legislación laboral** aunque su ejecución pueda ser atribuida a los órganos de las Comunidades Autónomas; así como en materia de legislación básica y del régimen económico de la **Seguridad Social**, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas (Const art.149.1.7ª y 17ª). El Tribunal Constitucional resuelve qué **potestad sancionadora** ha de atribuirse a la Administración que tiene la competencia sobre la materia en la que se ejerce (TCO 195/1996), correspondiendo la actividad inspectora a la Administración que tenga las competencias de ejecución (TCO 87/1985 y 227/1988).

El sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (en adelante ITSS) está definido como un conjunto institucional, constituido por principios legales, normas, órganos, funcionarios y medios materiales, que como **servicio público**, ejerce la vigilancia del cumplimiento de las normas de orden social y exige las responsabilidades pertinentes, así como el asesoramiento, y en su caso, arbitraje, mediación y conciliación en dichas materias, de conformidad con los principios del Estado social y democrático de Derecho que consagra la Constitución Española, y las normas internacionales (nº 200 s.). Su Reglamento orgánico y funcional se regula en el RD 138/2000.

Por **normas del orden social** se incluyen, las normas laborales, prevención de riesgos laborales, seguridad social y protección social, colocación y empleo, cooperativas, emigración e inmigración de extranjeros.

Las funciones de la ITSS se realizan en su totalidad por **funcionarios** de nivel técnico superior y habilitación nacional pertenecientes al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, cuya situación jurídica y condiciones de servicio les garanticen la independencia técnica, objetividad e imparcialidad, con la participación de los funcionarios del Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social en el desarrollo de funciones de inspección de apoyo, colaboración y gestión (nº 900 s.). Para labores de colaboración con la ITSS en determinadas materias relacionadas con la vigilancia de las obligaciones de prevención de riesgos laborales, el sistema dispone de la actuación de funcionarios técnicos de prevención de las Comunidades Autónomas (ver nº 6010).

A. Naturaleza e incardinación administrativa

(L 42/1997 art.18.2)

10

El sistema actual hace posible conjugar y acoplar las condiciones de participación de las Administraciones Autonómicas y de la Administración General del Estado, dentro de un sentido unitario e integrado de sus actuaciones bajo una **Autoridad Central**, en el cuál los funcionarios de la Inspección pertenecientes a los Cuerpos que la constituyen desarrollan la totalidad de los cometidos que legalmente tienen encomendados cualquiera que sea la Administración titular de la competencia, por las ventajas que comporta la coincidencia en unos mismos inspectores todos los cometidos y funciones del ámbito social, los beneficios que reporta alejar la labor técnica e independiente del inspector de los órganos de decisión administrativa, y favorecer a un tratamiento homogéneo y común en todo el territorio nacional de la actuación fiscalizadora del cumplimiento de la normativa social.

La necesaria **coordinación** está garantizada a través de los Acuerdos bilaterales, las Comisiones Territoriales y la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales.

1. Ubicación administrativa de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

(L 42/1997 art.16, 17 y 19.2; RD 138/2000 art.28)

15

La **dependencia actual orgánica** de los funcionarios de la ITSS, se proyecta hacia la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, órgano de la Administración General del Estado que asume la función de Autoridad Central, sin condicionar el ámbito de sus actuaciones funcionales.

Respecto a la **dependencia funcional** las ITSS en el desarrollo de su actividad, actúan bajo la dependencia de la Administración General del Estado, o de la respectiva Comunidad Autónoma, según la titularidad competencial que cada una tenga en función de la materia sobre la que recaiga cada actuación.

Se **estructura** según criterios comunes acomodándose a las características de cada demarcación, con aplicación del principio de trabajo programado y en equipo, estableciéndose unidades especializadas necesarias en sus áreas funcionales de actuación. Para su **actuación** la ITSS programa su actividad según los objetivos que determinen las autoridades competentes, y funciona con sujeción a los principios de concepción institucional única e integral y a los principios constitucionales de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación (Const art.109.1). Los **objetivos** para la acción inspectora pueden ser de ámbito general o territorial, en atención a su carácter y ámbito espacial de desarrollo.

Con **previsiones de futuro** se abre la posibilidad dentro del propio sistema, que mediante Acuerdos bilaterales con las Comunidades Autónomas se pueda producir la **adscripción orgánica** de funcionarios de la ITSS a las **Administraciones Autonómicas**. En caso que ello suceda, la transferencia de los funcionarios se realizará por los procedimientos establecidos en el respectivo Estatuto de Autonomía.

16

Los **instrumentos de coordinación** previstos son los siguientes:

- la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales (nº 1330);
- las Comisiones territoriales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (nº 1333);
- los Acuerdos bilaterales (nº 1335).

17

PRECISIONES

1) Resulta esencial de cara a la bivalencia de la ITSS, como función de la Administración General del Estado o de las correspondientes Comunidades Autónomas, la **atribución competencial por materias** que establece el Tribunal Constitucional, al diseccionar los preceptos de la L 8/1988, a los efectos de delimitar la competencia sancionadora entre Administraciones, configurando la actuación de la ITSS como elementos instrumental para el ejercicio de la competencia de inspección de cada una de ellas (TCO 195/1996).

2) La mayor dificultad delimitadora está representada en la determinación de las competencias de ejecución del sistema de Seguridad Social, en cuanto a su incidencia en su régimen económico, ya que el resto de ejercicio de competencias en el ámbito social, salvo las referentes a migración e inmigración, son de las Comunidades Autónomas. Al respecto, se considera que no son competencias transferibles las propias de su **régimen económico**, ya que el Estado debe de ejecutar de forma exclusiva éstas competencias a los efectos de asegurar el mantenimiento de un régimen público, único y unitario de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice al tiempo la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y deberes en materia

de Seguridad Social, y por ello las actuaciones propias de la TGSS, para hacer efectivos los principios de solidaridad financiera y unidad de caja. La alusión en la Const art. 149.1.17ª sobre las competencias exclusivas del Estado sobre el régimen económico de la seguridad social, ha de incluir todas las de ejecución financiera del sistema, actualmente desarrolladas por la TGSS como caja única, para el control y seguimiento de sus fuentes de financiación, inversiones y recursos, bonificaciones, recaudación, aplazamientos, exigencia de cotizaciones, cobro de débitos y recuperación de activos, y traspasos de fondos para el pago de prestaciones, y por tanto las propias de la ITSS contenidas en el Reglamento General de Recaudación, de exigencia de cuotas mediante actas de liquidación, propuestas de liquidación y requerimientos de ingreso de cuotas, así como las actuaciones de vigilancia del cumplimiento de la normativa sobre aspectos obligacionales que afecten o deriven hacia el control de recursos económicos de Seguridad Social (TCO 124/1989).

Materias transferidas a las Comunidades Autónomas (Const art. 148.1.13ª y 149.1.7ª) Las materias que ha sido transferidas a las Comunidades Autónomas, salvo a Ceuta y Melilla, son todas las relativas a la **ejecución de la normativa laboral**, incluyéndose las de relaciones de trabajo individuales y colectivas, prevención de riesgos laborales, empleo y colocación. En **cooperativas** las competencias de las Comunidades Autónomas son plenas tanto legislativas como de ejecución dentro de la propia Comunidad, como manifestaciones de modalidades para el fomento del desarrollo económico.

El **resto de las materias**: seguridad social, emigración e inmigración continúan siendo en estos momentos ejercidas por la Administración General del Estado, algunas porque siendo transferibles aún no se ha desarrollado su proceso, como resultan dentro de ejecución de la normativa básica de Seguridad Social, todas las competencias instrumentales: encuadramiento, inscripción de empresas, afiliación, altas, bajas de trabajadores; las de reconocimiento de prestaciones y pago de las mismas, y las propias hacia las entidades colaboradoras en la gestión sin incidencia en el régimen económico: mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y empresas colaboradoras.

Materias no transferibles a las Comunidades Autónomas (Const art. 149.1.2ª y 17ª) El techo de posibles nuevas transferencias hacia las Comunidades Autónomas y sus efectos en cuanto a la Administración que ha de ejercitar las competencias de inspección en esas materias como destinataria de las actuaciones de la ITSS, está limitado por las incluidas dentro del concepto de **régimen económico de Seguridad Social**, y las referidas al ejercicio de las competencias en materia **extranjería y de emigración**, cuya ejecución es competencia exclusiva del Estado.

19

21

2. Relaciones entre las Administraciones sobre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

(L 42/1997 art. 21)

El **Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales** debe integrar y coordinar los **planes de actuación territorial** de la ITSS en planes de alcance general, oídas las autoridades autonómicas competentes, con sujeción a los principios generales que informan las relaciones entre las Administraciones públicas. Para la coherencia de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la colaboración entre las Administraciones, por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y por las Comunidades Autónomas se han de facilitar los datos, documentos, memorias o estadísticas relativos al ejercicio de las funciones de la ITSS de que se dispongan.

La **Autoridad Central** de la ITSS comunica a los **Presidentes de las Comisiones Territoriales**: los acuerdos o recomendaciones adoptados por la Conferencia Sectorial; los objetivos inspectores en materia de ámbito supraautonómico y los que deriven de directrices supranacionales o afecten a actuaciones inspectoras en materia de competencia compartida; los que se establezcan en los acuerdos bilaterales, y los objetivos de inspección previstos para el territorio en materias de competencia estatal, todo ello a efectos de que pueda considerarse en la respectiva programación territorial.

Para garantizar la unidad general, coherencia y eficacia del sistema de inspección, la Autoridad Central constituye el cauce orgánico ordinario para las **relaciones institucionales** entre los Presidentes de las Comisiones Territoriales y las autoridades autonómicas con el sistema de inspección. Para ello forma parte de los órganos generales y territoriales de colaboración y cooperación de las Administraciones públicas con competencias en esta materia.

Las **Direcciones Territoriales** de la ITSS dependen de la autoridad central y de las autonómicas, desarrollan los cometidos y facultades que reglamentariamente se determinan y las que se establezcan en los acuerdos bilaterales.

25

3. Exclusiones del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social

(L 42/1997 art.4.2 y disp.adic.6ª; L 31/1995 disp.adic.3ª)

30

Las Comunidades Autónomas con competencias legislativas plenas en materia de orden social pueden atribuir en la ley que regule cada materia y para el ámbito de la misma, la función inspectora a **funcionarios distintos** de los que constituyen los Cuerpos de ITSS establecidos por la Ley Ordenadora. Implica la posibilidad que las Comunidades Autónomas, en materia de cooperativas y políticas de fomento económico, pueden crear un sistema de inspección propio y diferente. También se prevé la posible exclusión de los funcionarios del Sistema de ITSS, como las funciones de inspección en **materia preventiva** dirigidas al **personal** a su **servicio en Comunidades Autónomas** y entidades locales.

Y así en **otros sectores** como son: las competencias preventivas en actividades mineras, en centros de producción de energía nuclear, y en establecimientos militares en lo referente al personal al servicio de la Administración, excluidos del Sistema de ITSS, en base a las propias normativas específicas reguladoras, donde se prevea legalmente atribuciones de inspección a otros órganos de las Administraciones públicas.

4. Alta Inspección del Estado en el orden social

(Const art. 150.2; L 42/1997 disp.adic.3ª; RD 138/2000 disp.adic.1ª)

35

Las **funciones** de Alta Inspección del Estado en el orden social que vengán reconocidas en los respectivos Estatutos de Autonomía, salvo la relativa a asistencia sanitaria, se encomienda a la **Unidad Especial de Inspectores** de Trabajo y Seguridad Social que al efecto depende del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.

El desarrollo de ésta actuación propia de las competencias del Estado tiene su **base constitucional** al preverse el establecimiento de formas de control por parte de Gobierno del ejercicio de las Comunidades Autónomas de las competencias transferidas y previstas en las propias Leyes Orgánicas de transferencias.

El **ejercicio** de la Alta Inspección del Estado en el orden social está incluida como una función a desarrollar por funcionarios integrados en la correspondiente Unidad Especial, creada a estos efectos dentro del Sistema de ITSS, adscribiéndose a la misma inspectores de trabajo y seguridad social con acreditada experiencia y preparación.

La Unidad Especial no **depende** de la Autoridad Central de la ITSS, sino directamente del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y cuenta con los medios necesarios para sus cometidos.

B. Principios legales

40

Los principios legales que definen el sistema, son los fundamentos jurídicos que sirven para regular la **actuación administrativa** como instrumento esencial para el desarrollo de las funciones encomendadas a la ITSS. Dentro de éstas, resultan esenciales y justifican desde su origen la propia existencia de la ITSS, las dirigidas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento de las obligaciones de ámbito social mediante la iniciación del procedimiento sancionador para la exigencia de responsabilidades en caso de incumplimientos. El ejercicio de esa competencia significa una manifestación de la **potestad sancionadora** del Estado, que ha de ser practicada bajo la exigencia de una pluralidad de requisitos, algunos de los cuales tienen su reflejo en el Título I de la Constitución y otros asentados en la jurisprudencia y en los principios generales del derecho, en cuanto a su orden punitivo.

PRECISIONES

La actuación de la ITSS como actuación administrativa en su vertiente sancionadora, está sometida al contenido del Título IX, de la L 30/1992, cuyos principios los recoge el Reglamento de General sobre el procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones en el orden social (RD 928/1998), previsto como procedimiento especial para ésta materia (L 30/1992 disp.adic.7ª), no siendo de aplicación en esta materia el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora (RD 1398/1993).

1. Principio de legalidad

(Const art.9.3 y 25.1; LRJPAC art.127 y 129; RD 928/1998 art.14.c)

Es el principio esencial que regula la potestad sancionadora del ordenamiento. Significa que nadie puede ser condenado o sancionado por **acciones u omisiones** que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa según la **legislación vigente** en aquel momento. Es una limitación de los poderes públicos para aplicar medidas punitivas, exigiendo que las conductas por las que se pueden imponer sanciones, constituyan infracciones por predefinición de una norma legal vigente en el momento de producirse los hechos constitutivos de la misma.

Su **aplicación** debe proyectarse desde una triple vertiente: irretroactividad, tipicidad y reserva de ley.

a) La irretroactividad de las normas sancionadoras: son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyan la infracción administrativa. Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo sólo cuando favorezcan al presunto infractor.

b) La tipicidad y reserva legal: el Tribunal Constitucional al analizar el contenido del principio de legalidad lo fundamenta en una **doble garantía**:

- de **orden material** y alcance absoluto, manifestada en la necesidad de existencia de una norma previa al incumplimiento que establezca las conductas que son ilícitas y que constituyen con certeza infracciones, así como la naturaleza de la sanción que corresponde a cada incumplimiento;
- de **orden formal**, dirigida a preservar que todas las normas definidoras de incumplimientos y de atribución sancionadora tengan el rango de Ley (TCo 61/1990).

La primera garantía se corresponde con la tipicidad y la segunda con la reserva legal.

La **potestad sancionadora** reconocida por la Constitución, se ejercita cuando haya sido **expresamente atribuida** por una norma de rango de ley, con la aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio. Complementando lo anterior, la exigencia de tipicidad está contenida al establecerse que sólo constituyen **infracciones administrativas** las vulneraciones del Ordenamiento Jurídico previstas como tales infracciones por una ley, y se reafirma con un sentido limitativo y excluyente determinando que únicamente por la comisión de infracciones administrativas puede imponerse sanciones que, en todo caso, están delimitadas por la ley. Las infracciones administrativas se clasifican por ley en: leves, graves y muy graves.

En el ámbito material de la actuación de la ITSS en el ejercicio de sus competencias de **iniciación de procedimientos sancionadores**, el principio de legalidad en su vertiente de tipicidad, está sometido a los **dos componentes**:

- de una parte, que la conducta que constituye el incumplimiento sancionable suponga el **quebranto** por acción u omisión por parte del sujeto responsable de obligaciones contenidas en **normas** legales reguladoras de las materias del orden social;
- el otro componente de la tipicidad está manifestado por la exigencia que el incumplimiento, que constituye la conducta cometida por el sujeto responsable, esté expresamente determinado como **infracción administrativa** por una norma de rango legal, como infracción leve, grave, o muy grave, así como la determinación de la sanción que corresponde a cada tipo de infracción.

En el orden social, el RDLeg 5/2000, es actualmente la **norma legal** que en materia social da cobertura a la exigencia formal del principio de legalidad. Tan sólo queda fuera de este RDLeg, la tipificación y sanciones de los incumplimientos a la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los **extranjeros** en España (LO 4/2000).

La exigencia del respeto a éste principio en la actuación de la ITSS, está presente en los requisitos formales exigibles a las **actas de infracción** al tener que reflejar entre otras precisiones la infracción o infracciones presuntamente cometidas con expresión del precepto o preceptos vulnerados y su calificación.

PRECISIONES

- 1) El requisito de **tipicidad** exige la **determinación normativa** concreta de la ilicitud de la conducta, de forma que permita conocer con un suficiente grado de certeza los comportamientos que por acción u omisión constituyen infracciones y las sanciones que serán aplicables cuando se produzcan las mismas (TCo 61/1990), obligando al legislador de las normas de tipificación que la **descripción del incumplimiento** que constituye la infracción sea lo suficiente clara y precisa para conocer las consecuencias sancionadoras de las conductas contrarias a las obligaciones, si bien se admite en ocasiones, ante la minuciosidad que se precisa y complejidad que origina, la utilización de **conceptos jurídicos indeterminados**, siempre que su concreción sea razonablemente factible en virtud de criterios lógicos y técnicos, que permita prever con suficiente seguridad la conducta sancionable (TCo 149/1991).

45

46

47

2) En la aplicación del principio de legalidad, es admisible que el incumplimiento pueda venir referido a **normas reglamentarias**, a través de la reconocida colaboración reglamentaria admitida a éstos efectos por el Tribunal Constitucional (TCO 83/1984), que pueden contener obligaciones cuyo incumplimiento serán motivadoras de sanciones, cuando estos reglamentos supongan desarrollos de obligaciones legales con habilitación expresa de ella, siempre que en la ley que da cobertura a la norma reglamentaria queden suficientemente determinados los elementos esenciales de la conducta antijurídica (TCO 305/1993).

Las cláusulas normativas de los **convenios colectivos**, igualmente suponen obligaciones cuyo incumplimiento puede derivar en una actuación sancionadora por parte de la Administración, en virtud de la fuerza vinculante (Const art.37) y la obligatoriedad de su cumplimiento a los incluidos en ámbito de aplicación (ET art.82).

2. Presunción de inocencia

(Const art.24.2; LRJPAC art.134 y 137)

55

En los **procedimientos sancionadores** todas las personas gozan de la presunción de inocencia y por ello, de no responsabilidad mientras no se demuestre lo contrario. Implica que corresponde a los poderes públicos que ejerzan esa potestad sancionadora **probar previamente el incumplimiento** que se haya producido.

En la **actuación sancionadora** de la Administración, se exige la presunción de inocencia, de tal forma que los procedimientos sancionadores han de respetar dicha presunción mientras no se demuestre lo contrario.

56

Procedimiento sancionador (LRJPAC art.134; RD 928/1998) Para la **imputación de responsabilidad** hacía un sujeto, como garantía hacia el mismo, debe efectuarse obligatoriamente mediante la tramitación de un procedimiento legalmente establecido, sin dilaciones, en el cuál esté determinada:

- la **forma** en que debe actuar la Administración para la consecución de pruebas y la diligencias de investigación y comprobación que ha de efectuar y sus límites de actuación;
- los **medios de defensa** que puede utilizar el sujeto presuntamente responsable y las pruebas que puede ofrecer ante las imputaciones recibidas;
- y la **garantía** del reconocimiento de un derecho a la tutela judicial efectiva de juzgados y tribunales.

Al efecto, el ejercicio de la potestad sancionadora requiere de un **procedimiento** legal o reglamentariamente establecido, y, en ningún caso, se puede imponer una sanción sin que se haya tramitado el necesario procedimiento. Para garantizar la objetividad de la resolución del procedimiento, se señala que los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre **la fase instructora y la sancionadora**, encomendándolas a órganos distintos.

Por tanto, el procedimiento establecido para las exigencias de **responsabilidades** administrativas por incumplimientos en el **orden social** y de **liquidación de cuotas** de la Seguridad Social se ha de iniciar por una actuación inspectora probatoria, realizada por la ITSS y finalizado por la resolución motivada que dicte la Autoridad administrativa competente, en función de la materia y cuantía. En el referido procedimiento están separadas y reguladas en sus correspondientes capítulos, la fase instructora desarrollada mediante las denominadas: **actividades previas** al procedimiento sancionador, y la sancionadora mediante el: **procedimiento sancionador**.

58

Presunción de certeza (LRJPAC art.137.3; L 42/1997 disp.adic.4ª.2; L 31/1995 art.9.3) Es la **Administración** a través de la actuación desarrollada por la ITSS la que debe de probar la conducta mantenida por el sujeto sometido a inspección, y en su caso probar el incumplimiento de obligaciones que pueda ser objeto de sanción, pudiendo utilizar para ese fin todos los medios de prueba aceptados en derecho, gozando para ello de la presunción legal de certeza que tienen como **valor probatorio** hechos constatados por **funcionarios públicos** a los que se reconoce la condición de autoridad, y que formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, sin perjuicio de las pruebas que los afectados por el procedimiento pudieran aportar a los efectos de poder desvirtuar tales apreciaciones.

La presunción de certeza se aplica también de forma específica a los funcionarios de la ITSS, tanto los pertenecientes al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, como los pertenecientes al de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social.

Asimismo, se otorga ese valor a las comprobaciones realizadas por los **funcionarios técnicos de prevención** de las Administraciones Autonómicas en determinadas actuaciones de comprobación en materia preventiva.

Garantía de derechos de defensa que tienen los presuntos responsables

(Const art.24; LRJPAC art.135 y 137.4; RD 928/1998 art.14) Garantizar unos derechos de defensa frente a las imputaciones de infracciones constituye una exigencia fundamental. Dentro de los **componentes** de este derecho, además del derecho a la **tutela efectiva** de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos, sin que por ninguna causa de pueda producirse indefensión, está: la asistencia de letrado, a ser informado de la acusación que se formula, a un proceso público sin dilaciones y con todas las garantías, y a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa. Son requisitos de **actuación administrativa** para la garantizar los derechos de defensa dentro del correspondiente procedimiento: se han de notificar los hechos que se imputen, las infracciones que pueden constituir y las sanciones que, en su caso se pudieran imponer, así como la autoridad competente para imponer la sanción y la norma que atribuya tal competencia.

El **presunto responsable** tiene derecho a formular alegaciones contra las imputaciones que reciban y derecho a presentar pruebas.

Con respecto a las **pruebas**, se establece que se practican de oficio o se admiten a propuesta del presunto responsable cuantas pruebas sean adecuadas para la determinación de hechos y posibles responsabilidades, y sólo pueden declararse improcedentes aquellas pruebas que por su relación con los hechos no puedan alterar la resolución final a favor del presunto responsable.

En el ámbito de la actuación sancionadora de la Administración por infracciones a la normativa social, el presunto responsable ha de tener conocimiento de los hechos sobre los que se formula la imputación y la sanción propuesta, mediante la notificación del **acta de infracción**. El derecho a la defensa está garantizado en la fase del procedimiento sancionador una vez recibida el acta de infracción conteniendo la propuesta de sanción, mediante la posibilidad de formular **alegaciones** y de presentar **pruebas** que puedan desvirtuar el valor probatorio de los hechos reflejados en el acta de infracción. La exigencia de celeridad del procedimiento también está contemplada al establecer la caducidad en caso de retrasos en los trámites del mismo en sus diferentes fases de tramitación.

PRECISIONES La posibilidad del sujeto afectado por un procedimiento sancionador a utilizar los medios de prueba que estime necesarios debe de ir vinculado al derecho a la presunción de inocencia. Así, se anuló la sanción impuesta por una infracción que dio lugar a un accidente mortal de trabajo por haberse rechazado la prueba propuesta por la parte, argumentando que la **presunción de certeza** de los hechos constatados por la ITSS como de elemento de comprobación, está condicionada al derecho que asiste al afectado de **presentación de pruebas** a los efectos de poder destruir aquella presunción de certeza mediante la presentación de prueba en contrario (TCO 168/2002).

3. Principio de responsabilidad objetiva

(LRJPAC art.130; RDLeg 5/2000 art.2)

A diferencia del ámbito penal, donde está consagrado de forma absoluta el principio de culpabilidad como requisito para la responsabilidad penal de una persona con capacidad propia de obrar, en sus modalidades de dolo o culpa diferenciando el grado de voluntariedad o imprudencia mostrado ante el acto ilícito como determinante de la propia tipificación penal, en el ámbito administrativo sancionador al proyectarse la potestad sancionadora no únicamente hacia las **personas físicas**, sino también a las **personas jurídicas** que resulten responsables de las infracciones aún a título de simple inobservancia, permite un deslizamiento de éste principio hacia una responsabilidad objetiva, diluyéndose el requisito de culpabilidad por razones de pura racionalidad y eficacia.

De no ser así sólo podría ser exigidas responsabilidades a los sujetos capaces de ser culpables y las personas jurídicas no tienen ésta condición, siendo admisible una diferenciación de trato por esa circunstancia, ni quedar impunes los incumplimientos cometidos por las sociedades. Referido al **orden social**, son **sujetos responsables** de infracciones de ésta naturaleza las personas físicas o jurídicas o comunidades de bienes.

La no exigencia de culpabilidad implica que la **mera conducta** por acción u omisión de una obligación del orden social, supone un incumplimiento sometido a responsabilidad administrativa hacia el sujeto responsable del mismo, ya sea persona física o jurídica, sin entrar en consideraciones sobre la existencia de un comportamiento doloso o culposo, imposible en sujetos de derecho inmateriales y abstractos como son las personas jurídicas.

4. Principio de proporcionalidad

(LRJPAC art.131; RDLeg 5/2000 art.39; LO 4/2000 art.55.3; RD 928/1998 art.14)

70

Deriva de los principios generales del Derecho, manifestado en el equilibrio necesario que debe de existir entre la importancia y significación de la **conducta** constitutiva de la infracción y la **carga sancionadora** que la misma implica. En el régimen sancionador administrativo la debida proporcionalidad entre la significación del hecho constitutivo de la infracción y la sanción que corresponde, está marcada de una parte, por la **calificación legal** de la infracción en función de la importancia o trascendencia de su contenido obligacional, como infracción: leve, grave o muy grave, y la correspondiente la **atribución sancionadora** legalmente establecida a las infracciones en función a su gravedad, y a esos efectos los tramos de cuantías sancionadoras aplicables.

Además de esta determinación en función de la calificación, de forma muy significativa, el objetivo de proporcionalidad se cumple aplicando la **graduación sancionadora** que se establezca dentro de cada tramo, en diferentes niveles en función a los **criterios** generales marcados: existencia de intencionalidad; naturaleza de los perjuicios causados; reincidencia en el incumplimiento en el término de un año cuando así se haya declarado por resolución firme.

En la actuación sancionadora de la Administración en el ámbito social, la **graduación de las sanciones** en el grado mínimo, medio y máximo, determina una **cuantía** dentro de cada escalón sancionador en función de la **calificación** de las infracciones, por los circunstancias apreciada por el inspector actuante y consideraciones específicas establecidas según cada materia, en donde también se contempla a los efectos de dar cumplimiento al principio de proporcionalidad, la **reincidencia** y la **infracción continuada** con efectos agravantes sobre las cuantía de las sanciones. Como soporte de esta exigencia legal, las **actas de infracción** que se levanten deben contener, como uno de sus requisitos formales, la propuesta de sanción, su graduación u cuantificación.

5. Principio non bis in idem

(LRJPAC art.133; RDLeg 5/2000 art.3)

75

Significa que nadie puede ser **sancionado dos veces** por una **misma conducta**, definido como un principio general del Derecho que en base al principio de proporcionalidad y cosa juzgada, excluye la aplicación de dos o más sanciones, o el desarrollo de dos o más procedimientos simultáneamente, en uno o más órdenes sancionadores cuando se presente una triple identidad, de sujetos, hechos y fundamentos, procediéndose a la **paralización del procedimiento** sancionador de la Administración, tanto respecto a concurrencias con procedimientos penales, como hacía otra resolución administrativa anterior que se proyecten sobre esa triple identidad.

La aplicación que este principio tiene un **efecto negativo**, de forma que la resolución sancionadora o condenatoria impide pronunciamientos posteriores, y un **sentido positivo** que en el supuesto que exista una segunda resolución por no haber tenido efectos condenatorios una anterior, se han de tener en consideración los hechos declarados probados en la primera.

El ordenamiento jurídico establece la subordinación del procedimiento penal sobre el administrativo, manifestándose no sólo en la **prioridad del proceso penal** en cuanto al enjuiciamiento del hecho infractor cuando exista coincidencia, sino también a la implicación positiva hacía la Administración ante hechos declarados probados en sentencia por la jurisdicción en un procedimiento anterior sobre los mismos hechos. Aunque el procedimiento penal se siga hacia persona responsable del incumplimiento distinta al responsable del procedimiento administrativo, cuando se produzcan las restantes identidades, la Administración debe de paralizar también el procedimiento sancionador hasta la finalización del procedimiento penal, ya que estará condicionada a los hechos declarados probados.

En el orden social, se establece que no pueden sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie **identidad de sujeto, hecho y fundamento**.

C. Normas reguladoras

El Sistema y la actuación de la ITSS, está regulado por una pluralidad de normas, las cuales tienen su aplicación por la condición de la propia naturaleza administrativa de las funciones realizadas por funcionarios públicos integrantes del Sistema. Como normativa **reguladora de la actuación** de la ITSS hay que hacer referencia a las disposiciones ordenadoras, organizativas y funcionales, y las distintas **normas sustantivas** legales y reglamentarias de índole social sobre las que ejercen los inspectores de trabajo y seguridad social su función de vigilancia. Cronológicamente en función de la naturaleza de su contenido dispositivo:

1. Normas supranacionales (nº 85).
2. Normas generales por la condición de funcionarios públicos (nº 90).
3. Normas específicas reguladoras del Sistema de Inspección y procedimiento de actuación (nº 95).
4. Normas tipificación y sanción de incumplimientos (nº 100).
5. Otras referencias normativas vigentes sobre materias específicas, que mencionan expresamente a la ITSS (nº 105).

80

1. Normas supranacionales

Norma	Contenido	BOE
OIT Convenio núm 81	Inspección del trabajo en la industria y el comercio, ratificado por España, por Instrumento de 30-5-60	04-01-1961
OIT Convenio núm 129	Inspección del trabajo en la agricultura, ratificado por España, por Instrumento de 11-3-71	24-03-1972
Decisión de la Comisión 95/319/CE	Comité de Altos Responsables de la Inspección de Trabajo	

85

2. Normas generales por la condición de funcionarios públicos

Norma	Contenido	BOE
L 30/1984	Reforma de la Función Pública	03-08-1984
L 53/1984	Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas	04-01-1985
RD 33/1986	Reglamento de Régimen Sancionador de los Funcionarios	17-01-1986
L 30/1992	Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común	27-11-1992
RD 429/1993	Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial	04-05-1993
RD 1777/1994	Adecuación a las normas reguladoras de los procedimientos de gestión de personal a la L 30/1992	20-08-1994
RD 364/1995	Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado	10-04-1995
RD 365/1995	Reglamento de situaciones administrativas de los funcionarios civiles de la Administración general del Estado	10-04-1995
LO 10/1995	Código Penal (delitos contra la Administración Pública: Título XIX)	24-11-1995
L 4/1999	Modif LRJPAC (L 30/1992)	14-01-1999

90

3. Normas específicas reguladoras del Sistema de Inspección y procedimiento de actuación

Norma	Contenido	BOE
RD 97/1986	Desarrollo de la L 30/1984 disp.adic.9ª, sobre la creación del Cuerpo Superior de ITSS	24-01-1986
OM 17-1-1991	Procedimiento de consulta a las organizaciones sindicales más representativas, para la elaboración de los programas de actuación de la ITSS relativos al control de la contratación laboral	19-01-1991
L 42/1997	Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social	15-11-1997
OM 12-2-1998	Normas para la aplicación de lo dispuesto en la L 42/1997 art.8.4, sobre el visado de actas de los Subinspectores	14-02-1998
DGITSS Resol 18-2-98	Libro de Visitas de la ITSS	28-02-1998
RD 928/1998	Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de Seguridad Social	03-06-1998
Subsecretaría MTAS Resol 23-6-98	Modelos de las actas y propuestas de liquidación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social	04-07-1998
RD 138/2000	Reglamento de Organización y Funcionamiento de la ITSS	16-02-2000
RDLeg 5/2000	Texto refundido de la Ley de Infracciones en el Orden Social	08-08-2000
RD 1125/2001	Reglamento de Organización y Funcionamiento de la ITSS (RD 138/2000)31-10-2001	
RD 707/2002	Reglamento de procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para la imposición de medidas correctoras de los incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del Estado	31-07-2002
RD 464/2003	Modif Reglamento de procedimiento administrativo (RD 707/2002)	11-06-2003
OM PRE/2457/203	Instrucción sobre ordenación de la Inspección de trabajo y Seguridad Social en empresas que ejercen actividades en centros, bases, o establecimientos militares	09-09-2003
Subsecretaría MTAS Resol 10-11-04	Modelos oficiales para las propuestas de liquidación de cuotas de la Seguridad Social y las actas de liquidación de cuotas de la Seguridad Social	21-12-2004 01-01-2005
RD 689/2005	Modifica el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la ITSS (RD 138/2000) y Reglamento general sobre procedimientos para la imposición (RD 707/2002)	23-06-2005
Subsecretaría MTAS Resol 16-10-05	Notificación en soporte electrónico de la relación nominal de afectados por las actas de liquidación de cuotas de la Seguridad Social practicadas por la ITSS	11-11- 2005
ITSS Resol 11-4-06	Libro de Vistas de la ITSS	19-04-2006
RDL 5/2006	Para la mejora del crecimiento y del empleo. Sobre consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas respecto de los objetivos y programas del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.	14-06-2006